

ESTADO, SOCIEDAD Y CULTURA
EN LA GLOBALIZACIÓN DE AMÉRICA LATINA,
CON REFERENCIA A LA ESPECIFICIDAD
CHILENA

MANUEL CASTELLS



FORO DE ALTOS ESTUDIOS SOCIALES
VALPARAISO
CHILE

PRESENTACIÓN

Es difícil pensar en una reflexión más apropiada sobre los intereses intelectuales del Foro que la conferencia de Manuel Castells contenida en este Cuaderno. La racionalidad predominante de la globalización es sometida por Castells a una crítica surgida de la consideración de sus relaciones con la sociedad y el Estado. Esta reflexión es articulada en torno a los siguientes conceptos principales: el informacionalismo y la globalización, la identidad cultural como resistencia y proyecto en un mundo globalizado, y el Estado-Red como respuesta a los ex Estados nacionales maltrechos por la globalización. Esta conceptualización es desarrollada en tres niveles de generalización: planetario, latinoamericano y chileno. Resalto a continuación sólo algunos aspectos de este excepcional análisis.

En tanto que la globalización se ha expresado básicamente como un instrumento de articulación de mercados capitalistas, el criterio determinante de inclusión o exclusión en este proceso es la rentabilidad. (Sus otras dimensiones –cultura, ciencia y tecnología– son menos conspicuas y puede decirse, subordinadas a la racionalidad económica). “El capitalismo informacional desregulado y competitivo” sometido al criterio predominante de la rentabilidad “supera los Estados, pero articula a los segmentos dinámicos de las sociedades en todo el planeta, al tiempo que desconecta y margina a aquellos que no tienen otro valor que el de su vida”. Entre los sectores incluidos destaca la economía moderna y en ésta, la economía criminal, altamente globalizada y beneficiada precisamente por los segmentos menos prósperos: la economía informal y la de supervivencia, en los cuales se revelan con más fuerza la pobreza, el deterioro medioambiental y la desigualdad.

Junto a este fenómeno, Castells observa “en nuestro tiempo histórico” un reforzamiento de las identidades culturales, religiosas, nacionales, territoriales, étnicas y de género, como principio básico de organización social, seguridad personal y movilización política. Su hipótesis es que este fenómeno se relaciona estrechamente con la globalización y la crisis de las instituciones del Estado-Nación y de la sociedad civil –en sus diversas expresiones grupales y corporativas– constituida en torno al Estado. Los Estados-Nación están obligados a adaptar sus políticas a los sistemas instrumentales que los capaciten para navegar en los flujos globales, sacrificando así los intereses de los grupos que hasta entonces habían sido protegidos. El reforzamiento de las identidades, representa la búsqueda de “principios alternativos de sentido y legitimidad”, por parte de los “sectores golpeados por los ajustes que impone la globalización... sin control... el individualismo agresivo asociado al neoliberalismo... la crisis de las ideologías socialistas tradicionales y el formalismo retórico de las declaraciones liberales de ciudadanía”. La pertenencia simbólica a categorías abstractas como ciudadanía y clase social y a las instituciones y organizaciones que las expresaban históricamente, tales como Estado y sindicatos, pierde fuerza. Muchos sectores llegan incluso a oponerse a la globalización y a su agente, el Estado ex nacional. Cuando la identidad principal es la religiosa o la Nación como comunidad cultural de larga duración histórica, “ser ciudadano es aún una fuente de derechos, pero ya no de sentido”. La explosión de cierto tipo de identidades, especialmente las religiosas fundamentalistas, invalidaría el proyecto racionalista (liberal o marxista) dirigido a de-sacralizar y des-ideologizar la sociedad moderna.

En la sociedad informacional, la economía mundial se sostiene cada vez más en redes de países y amplias áreas geográficas, que en los Estados considerados aisladamente. Sin embargo, los Estados asociados en red podrían ser instrumentales en el logro del objetivo de controlar la globalización, en conformidad a “intereses y valores exteriores a los mecanismos automáticos de dominación económica e ideológica inscritos en las redes globales dominantes”. Esto significa replantear el control político y social de la economía y la tecnología a partir de la sociedad y de la política. El Estado-Red sería el sucesor del Estado nacional.

Para que los Estados latinoamericanos puedan cumplir un papel activo transformándose en agentes de un nuevo tipo de globalización, deberían cumplirse varios procesos. Primero, superar el atraso en términos del desarrollo de la economía informacional, cuyas competencias son determinantes para formar

redes y asociarse entre ellos, implementar las reformas internas e integrar a los grupos de su sociedad a las ventajas de la globalización. Pero el desarrollo de esas competencias no garantiza la capacidad para controlar los flujos de capital, información y tecnología, ni aún a sociedades altamente desarrolladas (al respecto dos ejemplos son pertinentes: los efectos de las crisis financieras y el control de Internet). Segundo, para que el Estado llegue a ser agente de la globalización y de integración nacional, debiera superar al mismo tiempo la crisis de legitimidad, “relegitimándose” a través de nuevas alianzas con los grupos sociales dispuestos a responder activamente a los desafíos de la globalización y sirviendo de puente para la comunicación entre grupos culturales que quieren insertarse en la globalización sin abandonar sus “fuentes de sentido” comunitarias e individuales. La gran base social de apoyo al Estado latinoamericano desarrollista del pasado fueron los sectores urbanos organizados –obreros, populares, clase media burocrática y grupos económicos dominantes–, siendo excluidos los sectores urbanos no organizados y la población campesina (grosso modo, ciertamente hay diferencias entre países. Estas también son ilustradas por Castells). En la nueva alianza un lugar privilegiado cabría al movimiento antiglobalización, que se ha definido como “un movimiento por otra globalización” y que mostraría las mayores aptitudes para cumplir un papel activo. En este sentido, contribuirían su dimensión mundial, su interés en expresar un punto de vista crítico sobre los efectos y contenidos de la globalización: propugna un debate sobre sus contenidos y el abandono del programa único. No hay sujetos singulares, privilegiados. El programa único los divide. Todo esto supone la activación de estrategias de modernización y de democratización del sistema político. El control de la economía criminal es también parte de la reforma política y no solo de la económica. El Estado, considerado como agente de globalización activa, estaría compitiendo con el populismo mediático centrado en “personalidades” y con las estrategias de reconstitución o mantenimiento del Estado corporativo apoyado en grupos que ven la globalización como una amenaza de su estatus socio-económico y no visualizan estrategias de reconversión de sus competencias productivas.

Tercero, la configuración de una efectiva red de Estados democráticos requiere del desarrollo de nuevos mecanismos que institucionalicen los procedimientos para la formación de una voluntad política transnacional. La cooperación entre Estados y Estados con movimientos nacionales, regionales y globales trae consigo complicaciones en términos de representación y control democráticos. “Falto de

un andamiaje en una sociedad civil que sea a la vez supranacional y local, el Estado-Red gana en flexibilidad y eficacia lo que pierde en democracia y transparencia”.

A partir de estas categorías conceptuales de alcance global y latinoamericano, Castells examina la especificidad del caso chileno destacando los rasgos esenciales de la construcción histórica de la identidad nacional por parte del Estado; la ruptura de este modelo durante el golpe militar y el reemplazo de la ideología de la Nación por la de mercado; la relación Estado-Nación durante la transición y las evidencias de los límites del mercado durante la recesión de 1999. Finalmente visualiza la reconstrucción de los vínculos entre Sociedad, Estado e Identidad en nuestro caso. El gran desafío es la construcción de una identidad de proyecto que permita avanzar hacia una “nueva fase del modelo democrático”. Un componente central de este modelo es la definición de un proyecto informacional. Pero este no debe identificarse con el discurso que reduce a la sociedad de la información a una simple “propaganda tecnocrática de la modernidad [...] El desarrollo informacional es social por definición porque es desarrollo de las mentes, de las relaciones sociales y de las instituciones de aprendizaje, creación e innovación... el proyecto informacional consiste en adaptar la tecnología para los usos, intereses y valores de la sociedad y de cada uno de sus individuos [...] De ahí, el círculo virtuoso entre desarrollo y bienestar, mediante la relación entre innovación, tecnología y economía [...] Así, tal vez la movilización colectiva de Chile en función de una identidad-proyecto podría construirse en torno al desarrollo de una sociedad de la información con características propias. Pero no como proyecto tecnológico, sino como articulación entre modernidad tecnológica, prosperidad material, creatividad cultural, programa educativo y superación del aislamiento social y cultural, un tanto provinciano. Por eso la apelación mítica del nuevo modelo chileno podría construirse en torno a la referencia de Valparaíso. Valparaíso como hipertexto de la relación local/global. Valparaíso como metáfora de cultura abierta al océano del mundo, pero a partir de una irreducible identidad propia que entronca con la experiencia histórica y la memoria colectiva”.

Crisóstomo Pizarro
Director Ejecutivo del Foro Valparaíso

ESTADO, SOCIEDAD Y CULTURA EN LA GLOBALIZACIÓN DE AMÉRICA LATINA, CON REFERENCIA A LA ESPECIFICIDAD CHILENA

MANUEL CASTELLS

Catedrático Emérito de Sociología y de Planificación
de la Universidad de California-Berkeley

INTRODUCCIÓN

Estamos viviendo, desde hace más de una década, una transformación histórica multidimensional definida por la transformación del sistema productivo, del sistema organizativo, del sistema cultural y del sistema institucional, sobre la base de una revolución tecnológica que no es la causa pero sí el soporte indispensable. Hay que analizar esta transformación sobre el doble eje de la dinámica emergente de ese sistema y de la oposición de actores sociales y políticos, así como de individuos en torno una dinámica de oposición fundada en la construcción de identidades autónomas. El sistema político-institucional se define a partir de esta oposición. El proceso tiene expresiones específicas en cada cultura, en cada país, en cada constelación histórica. Pero también hay rasgos comunes que permiten comprender la dinámica político-cultural de la globalización más allá de las características propias de cada sociedad.

En términos de práctica social, el nuevo sistema productivo ha sido identificado como globalización. Pero también es esencial, en la dinámica de transformación, la construcción de identidad a través de la cual las personas constituyen su sentido. En torno a ese choque entre globalización capitalista e identidad propia, se construye la dinámica del Estado, una dinámica caracterizada por la crisis del Estado-Nación y la emergencia del Estado-Red. Veamos los distintos elementos de este análisis, especificándolos para América Latina. Se trata de un proceso que, como veremos, está marcado, recordando el término clásico de Fernando Fanjzylber, por la globalización truncada de América Latina.

Nota del autor: Este texto es una versión ampliada y actualizada de la conferencia pronunciada en el Foro Valparaíso el 13 de noviembre de 2003. Agradezco sinceramente a los organizadores del Foro la invitación con que me honraron. Quiero también dejar constancia de mi reconocimiento a los numerosos colegas chilenos que me han proporcionado información, ideas y comentarios sobre el contenido de esta ponencia.

1. GLOBALIZACIÓN, IDENTIDAD Y ESTADO

1.1. Informacionalismo y Globalización:

Redes de Capital, de Producción, de Tecnología y de Mercados

El informacionalismo, como sistema de producción económico-tecnológico, se caracteriza por el hecho de que la productividad, competitividad, eficiencia, comunicación y poder en la sociedades se constituye en buena medida a partir de la capacidad tecnológica de procesar información y generar conocimiento. Evidentemente, las tecnologías base no determinan la estructura social pero son componentes indispensables para el nuevo sistema, en la misma medida en que la sociedad industrial madura fue (y es) inseparable de la electricidad.

Globalización no es sinónimo de internacionalización. En sentido estricto es el proceso resultante de la capacidad de ciertas actividades de funcionar como unidad, en tiempo real, a escala planetaria. Es un fenómeno nuevo, porque solo en las dos últimas décadas del siglo XX se ha constituido un sistema tecnológico de sistemas de información, telecomunicaciones y transporte, que ha articulado todo el planeta en una red de flujos en las que confluyen las funciones y unidades estratégicamente dominantes de todos los ámbitos de la actividad humana. Así, la economía global no es, en términos de empleo, sino una pequeña parte de la economía mundial. Pero es la parte decisiva. La economía global incluye, en su núcleo fundamental, la globalización de los mercados financieros, cuyo comportamiento determina los movimientos de capital, las monedas, el crédito y, por tanto, las economías en todos los países. Los mercados de divisas cambian diariamente 2.5 billones de dólares, haciendo imposible para cualquier gobierno sostener su divisa en contra de turbulencias masivas de los mercados financieros. El desarrollo y creación de sofisticados productos financieros (derivados, nuevos tipos de futuros, opciones, etc.) articulan valores bursátiles en distintos mercados, estableciendo su interdependencia a través de transacciones electrónicas que mueven miles de millones de dólares en segundos. Según algunos cálculos, el valor de mercado de la capitalización del total de productos financieros derivados en 1998 era equivalente a 12 veces el valor estimado del producto bruto total del planeta. No hay, hoy por hoy, control o regulación de los flujos globales de capital (salvo de forma limitada y coyuntural, como en el caso de Chile y Malasia), lo que convierte a todas las economías en dependientes del comportamiento de los valores de sus empresas, acciones y obligaciones en los mercados financieros. La globalización de

la economía también incluye la importancia creciente del comercio internacional en el crecimiento económico, el aumento considerable de la inversión extranjera directa, la globalización de una parte esencial de la producción de bienes y servicios en torno a empresas multinacionales y a sus redes auxiliares, la interpenetración internacional de mercados de bienes y servicios, la formación de un mercado global de trabajadores de especial cualificación (de los ingenieros de software a los futbolistas) y la importancia de las migraciones internacionales de mano de obra desplazada por las crisis económicas hacia zonas con mayores oportunidades de empleo y progreso. Junto a la globalización económica en sentido estricto, asistimos también a la globalización de la ciencia, la tecnología y la información; la globalización de la comunicación, tanto en los medios de comunicación masiva y multimedia, como en las nuevas formas de comunicación a través de Internet; y, en una dimensión más siniestra, la globalización del crimen organizado tiende a penetrar las instituciones de gobiernos en numerosos países, con efectos perversos considerables sobre la soberanía y la legitimidad políticas.

El nuevo sistema global que se constituye a partir de redes de intercambio y flujos de comunicación es a la vez extremadamente incluyente y extremadamente excluyente. Incluyente de todo lo que tiene valor según los códigos dominantes en los flujos y excluyente de todo aquello que, según dichos códigos, no tiene valor o dejar de tenerlo. En la medida en que la globalización se ha desarrollado, esencialmente, como instrumento de articulación de mercados capitalistas, la rentabilidad económica (ya sea mediante ganancia o acrecentamiento del valor patrimonial, según los casos) se convierte en el criterio fundamental para la inclusión o exclusión en las redes globales. Se constituye así un sistema extraordinariamente flexible y dinámico, pero sometido a fuertes oscilaciones y a una dinámica competitiva que no admite tregua o error. Las redes globales articulan individuos, segmentos de población, países, regiones, ciudades, o barrios, al tiempo que excluyen otros tantos individuos, grupos sociales o territorios. Todos los países y territorios están atravesados por dicha lógica dual, de forma que se crean redes transnacionales de componentes dinámicos de la globalización, al tiempo que se segregan y excluyen segmentos sociales y territorios al interior de cada país, región o ciudad. Naturalmente, en proporciones altamente variables según las zonas del mundo en que opere la competitividad. Si en África la gran mayoría de la población está excluida del sistema globalizado (aunque sufre las consecuencias de lo que ocurre en dicho sistema), en Estados Unidos la proporción oscila en torno

al 15%, aunque en el centro-sur de Los Angeles asciende al 20%. Esta geografía diferencial de la exclusión social se complica aún más con la geometría variable de la globalización, cuando turbulencias informativas en los mercados financieros propulsan sectores económicos y territorios hacia la prosperidad (Silicon Valley, Finlandia), o la desintegración (Indonesia 1998, Argentina 2001) según procesos que solo parcialmente responden a cálculos estrictamente económicos.

Si las fuentes de productividad y competitividad en la nueva economía global dependen fundamentalmente, como señalé anteriormente, de la capacidad de generación de conocimiento y procesamiento eficaz de la información, esta capacidad depende, a su vez, de la capacidad cultural y tecnológica de las personas, empresas y territorios. En la economía informacional, la educación y la innovación se constituyen en fuerzas productivas directas. Pero siendo condiciones necesarias para el nuevo modelo de desarrollo, no son suficientes. Porque en la medida en que el excedente se transfiere al mercado financiero, el comportamiento del mercado financiero, sometido a percepciones de psicología colectiva y a turbulencias informativas de todo origen, influye decisivamente en la riqueza y la pobreza de las naciones. En este nuevo modelo de desarrollo informacional, la sociedad y las instituciones juegan un papel decisivo. Ello es así, por un lado, porque la productividad y competitividad dependen de la calidad de los recursos humanos y de la capacidad estratégica de instituciones y empresas para articular dichos recursos en torno a proyectos de inversión viables y sustentables. Por otro lado, porque la estabilidad social y política y el eficaz funcionamiento de las instituciones son factores psicológicos esenciales para los inversores globales, de cuyo comportamiento depende, finalmente, el valor de empresas y países en los mercados financieros.

La globalización, en su encarnación actual de capitalismo informacional desregulado y competitivo, supera a los Estados, pero articula a los segmentos dinámicos de las sociedades en todo el planeta, al tiempo que desconecta y margina a aquellos que no tienen otro valor que el de su vida.

1.2. La Identidad Cultural como Resistencia y como Proyecto en un Mundo Globalizado

La informacionalización y la globalización son procesos centrales de la constitución de una nueva economía y una nueva sociedad en el cambio de milenio. Pero junto a ellos, y en interacción compleja, otro fenómeno, de índole cultural

y política, está transformando el mundo. El reforzamiento de las identidades culturales como principio básico de organización social, seguridad personal y movilización política. Identidad, en términos sociológicos, es el proceso por el cual los actores sociales construyen el sentido de su acción atendiendo a un atributo cultural (o conjunto articulado de atributos culturales) al que se da prioridad sobre otras fuentes posibles de sentido de la acción. Puede darse el caso de varias identidades en un individuo, pero tal pluralidad es siempre fuente de tensión. No siempre se define un actor por su identidad, pero cuando el principio de definición es identitario, es un principio fuerte que tiende a cobrar preeminencia sobre otras fuentes de sentido. En nuestro tiempo histórico, las identidades religiosas, nacionales, territoriales, étnicas y de género aparecen como principios fundamentales de auto-definición, cuyo desarrollo marca la dinámica de las sociedades y la política de forma decisiva. Sin entrar en controversias poco útiles sobre la novedad histórica de esta explosión identitaria, sí puede sostenerse que su existencia invalida la tesis de la de-sacralización y des-ideologización de la sociedad moderna. La superación de las identidades, que era el gran proyecto histórico del racionalismo (liberal o marxista) ha sido superado por el renovado poder de la identidad.

Junto a estas identidades fuertes, comunitarias, aparentemente fundadas en experiencia histórica y tradición cultural, hay también el surgimiento de identidades individuales, auto-construidas en torno a un proyecto personal, a un principio electivo. Tales identidades individualistas son particularmente importantes en sectores sociales o sociedades en que las identidades comunitarias no se desarrollan, pero en las que los principios abstractos de pertenencia simbólica (tales como ciudadanía, clase social etc.) se debilitan como resultado del vaciamiento de contenido histórico de las instituciones y organizaciones que encarnaban dichos principios (el Estado-Nación, los sindicatos de clase, etc). Una identidad individualista particularmente importante es la identidad familiar, o individualismo familiar, en la que se funde el sustrato comunitario y el proyecto autónomo de existencia, vaciado de todo otro contenido que la afectividad inmediata y defensiva hacia uno mismo y los suyos.

¿Por que se desarrollan las identidades como principios constitutivos de la acción social en la era de la información? Mi hipótesis, apoyada en la observación de movimientos sociales y expresiones identitarias en todo el mundo, es que este desarrollo es consecuencia de la globalización y de la crisis de las instituciones del Estado-Nación y de la sociedad civil constituida en torno al Estado (Castells, 2003). Me explico. La globalización desborda la capacidad de gestión de los Estados-Na-

ción. No los invalida totalmente, pero los obliga a orientar su política en torno a la adaptación de los sistemas instrumentales de sus países hacia la navegación en los flujos globales. Al hacerlo, los Estados tienen que sacrificar intereses de sectores hasta entonces protegidos por él. Es más, la sociedad civil, según la concepción gramsciana original, no se constituye contra el Estado sino en articulación con el Estado, orientada hacia el Estado: sindicatos, cooperativas, organizaciones religiosas y ciudadanas. Cuando el Estado tiene que atender, prioritariamente, a la dinámica de flujos globales su acción hacia la sociedad civil se torna secundaria y por consiguiente el principio de ciudadanía emite un significado cada vez más débil hacia los ciudadanos. En esas condiciones, los sectores golpeados por los ajustes que impone la globalización buscan principios alternativos de sentido y legitimidad. En esa búsqueda la gente se hace consciente del déficit democrático que existe tras el andamiaje institucional e ideológico del sistema político. Y aunque no se suele poner en cuestión la democracia (cuya conquista, casi siempre, costó sangre y lágrimas), surge una oposición explícita a la globalización y a su agente, el Estado ex nacional, ahora agente racionalizador de la globalización, en torno a un principio constitutivo distinto. En muchos casos se separa la Nación del Estado, oponiendo al Estado-Nación la Nación-Estado (nacionalismo francés o argentino); o, bien, oponiendo al Estado-Nación, la Nación sin Estado (nacionalismo catalán, escocés o quebecois). En muchos otros casos el principio de etnicidad oprimida se utiliza como fuente de nueva legitimidad democrática (los zapatistas de Chiapas, los kataristas bolivianos). La identidad regional se constituye en principio de recomposición social frente a la crisis del Estado-Nación, como en Colombia. Pero tal vez es la identidad religiosa, fundamentalista o moderada, la que se constituye como el principal principio alternativo de reconstrucción del sentido a escala planetaria. Es el caso del islamismo, del hinduismo nacionalista, del judaísmo ortodoxo, del fundamentalismo cristiano, particularmente influyente en Estados Unidos y entre los evangelistas de América Latina. En forma distinta, el desarrollo del comunitarismo de base en la Iglesia católica latinoamericana proporciona un refugio y un sentido alternativos a las secuelas sociales de la globalización sin control, al individualismo agresivo asociado al neoliberalismo, a la crisis de las ideologías socialistas tradicionales y al formalismo retórico de las declaraciones liberales de ciudadanía. En la mayoría de los casos de movimientos sociales identitarios en el mundo hay un rechazo explícito de la globalización y una denuncia del Estado, convertido en rehén de los flujos globales. No estoy interpretando el sentido de los movimientos identitarios sino constatando el

sentido que se atribuyen a sí mismos. Conforme las identidades surgen como principios constitutivos de la acción social, corroen el principio fundamental de ciudadanía, sobre el cual se basó el Estado-Nación construido en la edad moderna. Si la identidad fundamental es la religiosa o la Nación como entidad histórica, ser ciudadano es aún una fuente de derechos, pero ya no de sentido. El laicismo y el individualismo de la democracia liberal, como construcción racional y abstracta emanante del contrato social, deja de ser el principio de pertenencia y, por tanto, el principio de legitimidad. El poder de la identidad destruye la legitimidad del Estado como fuente de sentido. Sometido a las presiones contradictorias de la globalización y las identidades culturales comunitarias, el Estado-Nación soberano y la sociedad civil constituida en torno a él entran en un proceso de declive histórico que pareciera ser irreversible.

1.3. El Estado Red

Sometido a las presiones de cambio tecnológico, económico y cultural, el Estado no desaparece: se transforma. Busca, por un lado, alianzas estratégicas, tanto estables como coyunturales con otros Estados, para tratar conjuntamente los problemas planteados por la globalización. Surgen así Estados co-nacionales, como es la Unión Europea, con un Banco Central Europeo independiente, una moneda única (aun con excepciones) y, por tanto, una economía unificada, a la que se añaden múltiples instituciones y leyes de ámbito europeo. Se refuerza el papel de las instituciones internacionales, como las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, la Organización de la Unidad Africana y las distintas organizaciones de seguridad regionales, en Europa, en el Pacífico, en América Latina. Se constituyen alianzas militares fuertemente integradas, como la OTAN, que, en la práctica, funden las fuerzas armadas de sus miembros en unas fuerzas armadas supranacionales con mando conjunto. Surgen formas políticas sui generis, a medio camino entre Estados co-nacionales e instituciones internacionales, como la Comunidad de Estados Soberanos, entre las ex repúblicas de la ex Unión Soviética. Proliferan las áreas de integración económica que trascienden la soberanía económica nacional, como son Mercosur, el Tratado de Libre Comercio de las Américas o, en embrión, el Acuerdo de Cooperación Económica en el Pacífico y la unión arancelaria de los países del ASEAN en Asia del Sudeste. Y se refuerza el papel de las instituciones económicas supranacionales, de ámbito global, como son el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, con influencia decisiva

en la regulación de la desregulación económica global, bajo control del exclusivo club G-8, en base a la influencia de su opinión en los mercados financieros internacionales. Así, el Estado-Nación se dota de instrumentos cooperativos de gestión, navegación y negociación en la globalización. El precio es alto: la pérdida de soberanía y el paso irreversible al poder compartido. O sea, se pierde poder para mantener influencia. Pero la alternativa es la irrelevancia de decisiones que ningún Estado (ninguno, ni siquiera los Estados Unidos, a pesar de su intento de unilateralismo militarizado) puede aplicar en solitario, como ha tenido que aceptar el mismo Estados Unidos en su aventura iraquí. Es más, ni siquiera esta confluencia de poderes y recursos permite asegurar el control de los gobiernos sobre los flujos de capital, información y tecnología, como se ha verificado en momentos tales como la crisis financiera asiática o los repetidos fracasos en controlar Internet. Pero, al menos, la construcción de esferas de poder compartido permite acrecentar la capacidad de negociación e intervención en relación con los flujos globales.

Por otra parte, el Estado-Nación, en casi todo el planeta, está buscando su relegitimación mediante la descentralización administrativa y la participación ciudadana. Se transfieren competencias a gobiernos locales y regionales, al tiempo que se democratiza su elección y se intenta fortalecer su capacidad autónoma de gestión. En algunos casos, esta descentralización va de par con el reconocimiento de fuertes identidades nacionales, regionales y locales, intentando así hacer compatible el principio de ciudadanía política y la afirmación de la identidad cultural. También han procedido los Estados a un reconocimiento creciente de la esfera de acción para-pública, mediante el desarrollo de ONGs que complementan las políticas públicas, articulando recursos privados y desburocratizando la gestión de programas sociales. A menudo las ONGs prolongan su acción en la esfera internacional, en un desarrollo paralelo a la internacionalización cooperativa de la intervención de los Estados. La descentralización del Estado-Nación y su apertura creciente (al menos formalmente) a la participación acentúan su pérdida de poder pero, por otro lado, permiten restaurar parte de su legitimidad en crisis.

Este doble movimiento del Estado-Nación hacia la cooperación internacional y hacia la devolución de poder a ámbitos sub-nacionales, conduce a la construcción de un nuevo sistema institucional, hecho de redes de órganos gubernamentales de distinto nivel, articuladas a estructuras no gubernamentales. Para cada problema, para cada ámbito de decisión se produce una configuración distinta de la combinatoria administrativa que compone el nuevo Estado. Es un Estado-Red,

que funciona mediante la interacción de sus distintos componentes en un proceso continuo de estrategia, conflicto, negociación, compromiso, co-decisión y decisión, que constituye la práctica político-administrativa concreta de nuestras sociedades. Tras la fachada grandilocuente del Estado-Nación soberano que aún se proclama como tal, los restos de un Estado maltrecho por la globalización y las identidades se reconfiguran en redes de colaboración y puesta en común de recursos. La flexibilidad de estas redes y su acceso a mayores fuentes de recursos y competencias, permite a los Estados no solo sobrevivir sino prosperar en la era de la información. Sin embargo, la complejidad de la decisión política en ese mundo de redes institucionales, desbordando cotidianamente el ámbito nacional, complica considerablemente la representación y el control democráticos. Falto de un anclaje en una sociedad civil que sea a la vez supra-nacional y local, el Estado-red gana en flexibilidad y eficacia lo que pierde en democracia y transparencia.

Trataré de situar la problemática general así trazada en el contexto de América Latina.

2. AMÉRICA LATINA A PRINCIPIOS DEL SIGLO XXI

La problemática latinoamericana a principios del siglo XXI puede estructurarse en torno a su relación específica con el informacionalismo globalizado, las identidades y el Estado (Calderón, coord., 2003).

2.1. Informacionalismo y globalización

La transición al informacionalismo, expresada mediante la globalización, ha transformado profundamente las economías y las sociedades en toda América Latina. En su dimensión fundamental, la financiera y monetaria, la globalización y las políticas de ajuste que de ella derivan, han inducido un nuevo marco macroeconómico, buscando la estabilidad monetaria y el control de la inflación como objetivo prioritario, la liberalización del mercado de capitales, la desregulación económica y la privatización de empresas públicas en casi todos los países. En ese sentido el funcionamiento de las economías latinoamericanas se dio como objetivo aproximarse sustancialmente al de las economías más avanzadas, creando las condiciones para una relativa homogenización de la inversión de capital y para el libre movimiento de mercancías. Y eso es lo esencial de la globalización económica: la unificación de criterios de mercado en un espacio económico ampliado.

La inversión extranjera, tanto directa como en el mercado de valores, se ha multiplicado, proporcionando recursos para el crecimiento económico y favoreciendo la transferencia de tecnología y la mejora de la gestión empresarial. El comercio internacional se ha diversificado por sectores y por regiones del mundo. Y se ha dinamizado, en calidad y en cantidad. El Tratado de Libre Comercio de las Américas y, en cierto modo, Mercosur han constituido áreas económicas crecientemente integradas que amplían mercados y contribuyen a mejorar la competitividad. Pero este proyecto de modernización ligado a una globalización capitalista, con escaso control social, tiene dos fallas fundamentales desde una perspectiva latinoamericana. La primera, su débil capacidad productiva y competitiva en el contexto mundial. La segunda, la incapacidad de integrar en el desarrollo económico a la mayoría de la población del continente, una buena parte de la cual se ve abocada a un proceso de marginación creciente. Veamos las contradicciones del modelo que se dio en llamar neo-liberal.

Desde el punto de vista económico, el punto débil de América Latina continúa siendo, sin embargo, su débil inserción en el modelo de producción informacional, debido a la falta de flexibilidad organizativa de las empresas y a la baja capacidad tecnológica de la mayoría de sus sectores de actividad, tanto en generación como en uso de nuevas tecnologías (Katz y Hilbert, 2003). Ello implica que la mayor parte de las exportaciones, en todos los países menos Brasil, corresponde aún a productos agropecuarios, materias primas y productos extractivos. La exportación de productos manufacturados, en todos los países, sigue concentrándose en los sectores de menor valor añadido. Las exportaciones de servicios continúan también mayoritariamente en las líneas tradicionales, como turismo (generalmente controlado por tour-operadores globales), con escasa competitividad en los servicios a las empresas, actividad de alto crecimiento y alto valor añadido. Una nueva dependencia, la tecnológica, marca la nueva economía latinoamericana en un momento decisivo de su articulación a la economía global. Por cierto que puede concebirse un desarrollo tecnológico que se traduzca en aumento de exportaciones primarias. Así, la economía exportadora estrella de los noventa, la chilena, sigue concentrando sus exportaciones, en buena medida, en la minería y en la línea agro-alimentaria. Y la utilización de tecnología avanzada, tanto biológica como de gestión informatizada, ha sido importante en la competitividad de las empresas más dinámicas del sector, tanto en Chile como en Brasil.

Con todo, en su conjunto, América Latina está integrada en la nueva economía

global. Pero de forma desigual y tal vez insostenible, con altos costos sociales y económicos en la transición, y con amplios sectores sociales y territorios excluidos estructuralmente de ese proceso de modernización e integración económica. Los índices de desempleo, pobreza y desigualdad varían, pero con excepción de Costa Rica y Chile (que ha mejorado su situación social, en parte por el bajo nivel de partida, en comparación con la situación de marginación masiva heredada de Pinochet) han aumentado en el conjunto de América Latina a lo largo de la década. El desarrollo desigual territorial se ha acentuado y la concentración de población y recursos en las grandes áreas metropolitanas sigue creciendo, suscitando tensiones sociales y deterioro medio-ambiental por falta de control y planeamiento de este proceso de urbanización acelerada, que ha llevado ya a las ciudades a más del 75% de la población latinoamericana. Se observa una distancia creciente entre el sector moderno, globalizado de la economía y el sector informal y de economía de supervivencia en el que trabaja la mayoría de la población. Si la marginalidad urbana era un mito cuando se formuló su teoría en los sesenta (puesto que la mayor parte de los llamados marginales urbanos estaban integrados en la economía formal) en estos momentos sí asistimos a dos dinámicas diferentes entre la articulación dinámica y la supervivencia informal. En parte, ello se debe a la descomposición/recomposición de la economía por los costos del ajuste, que han desintegrado sectores protegidos de la empresa pública y han estrangulado a numerosas pequeñas y medianas empresas por las altas tasas de interés, generando así paro estructural y no solo sub-empleo. Junto a ello, altas tasas de crecimiento económico han generado un amplio estrato medio-alto urbano de nuevo tipo, ligado a la empresa privada, con altos niveles de educación, sofisticación profesional y patrones de consumo homologables a los estadounidenses y europeos.

La crisis de amplios sectores de la población y de muchas regiones creó las condiciones para su utilización por parte de las mafias globales, que han realizado lo que denomino la conexión perversa, es decir, la reconexión de sectores de la población y regiones con la economía mundial, mediante actividades criminales de todo tipo (centradas en el tráfico de drogas y en el lavado de dinero) que encuentran mercados en expansión en las sociedades más ricas. La economía global criminal se ha convertido en un sector altamente dinámico, generador de riqueza y empleo, pero también destructivo e inductor de inestabilidad, en varios países de la región.

La dinámica de la globalización, y la aceleración del crecimiento económico,

incontrolado y espoleado por la búsqueda constante de competitividad, han conducido a una destrucción masiva del medio ambiente. Tanto en áreas rurales, como en las periferias de las grandes metrópolis, se está produciendo un deterioro irreversible del equilibrio ambiental que amenaza con degenerar en verdadero desastre ecológico.

En suma, América Latina está, de lleno, en la globalización. Con sus procesos de crecimiento dinámico, competitivo y modernizador, del que forman parte, hoy por hoy indisoluble, procesos de exclusión social y destrucción medioambiental. Con los datos en la mano, no es seguro que ese proceso, aunque irreversible, sea sostenible en lo económico, en lo social y en lo político.

2.2. La (re) construcción de identidades en América Latina

¿Cómo se relaciona el proceso de globalización truncada con la evolución de las identidades colectivas en América Latina? Cabe distinguir, aunque coexistan de forma articulada, tres principales identidades distintas: la étnica, la regional y la nacional. La étnica se ha manifestado fuertemente en la última década, de Chiapas, Guatemala y Bolivia, al Amazonas, Ecuador, Perú y al resurgir de las reivindicaciones mapuches. Para países como Guatemala, Ecuador y Bolivia es un principio fundamental de identidad, aun fraccionado, como en Bolivia, en distintas culturas. Para la mayoría de los países latinoamericanos es una identidad específica de comunidades que son minoritarias y frecuentemente marginadas. Pero, aun siendo minoritarias, se ha constituido en principios de movilización que se han hecho fuertemente presentes en la dinámica social de casi todas las sociedades latinoamericanas, con excepción de la Argentina, donde el genocidio de los indígenas fue llevado a cabo con gran eficacia. En algunos países, como Bolivia o Ecuador, la identidad indígena es hoy día un factor definitorio de la política nacional.

La identidad regional también se ha manifestado con más fuerza en el espacio público en la última década, marcando comunidades más allá de la cotidianeidad y el costumbrismo. Las culturas regionales colombianas, de Antioquia al Cauca, son principios definitorios de redes de protección social ante la crisis general del Estado colombiano. El norte mexicano encuentra su identidad reforzada por su carácter de polo dinámico del nuevo espacio económico, al tiempo que Yucatán y Chiapas buscan principios de movilización identitaria en su lucha contra una marginación creciente.

Pero a lo largo del siglo pasado, el principio identitario dominante en toda América Latina ha sido la identidad nacional. Era una identidad proyecto, como la argentina, por ejemplo, una identidad construida en torno a un Estado-Nación que, ya sea sobre bases populistas o clientelares, afirmaba un proyecto de desarrollo y una especificidad a la vez frente a los países poderosos –aun sirviéndolos en lo político y en lo económico, pero nunca en lo cultural, véase México-EE.UU.– y frente a los vecinos, siempre sospechosos de algún mal designio. El Estado construye la Nación y la identidad nacional aparece como la principal fuente de identidad colectiva, articulada en lo privado a la identidad religiosa y en lo público a la identidad política –directamente inspirada por el Estado (justicialismo, priismo, varguismo, fraccionamiento atroz entre identidades liberal y conservadora en Colombia).

Pues bien, en la medida en que el Estado aparece en los noventa como agente de la globalización y en la medida en que se despega de sus bases sociales tradicionales, la separación entre Estado y Nación lleva a una crisis de la identidad nacional como principio de cohesión social. Con una identidad nacional cuyo principio histórico fue construido por el Estado, al desligarse dicha identidad de su sujeto (el Estado), para la mayoría de la población la identidad nacional se convierte en un principio débil, en un principio que no basta para construir el sentido de la vida. La identidad nacional tiende a ser suplantada por dos fuentes distintas de sentido. Por un lado, el individualismo (incluido el familismo), legitimado por el mercado, se convierte en fuente de racionalidad y de proyecto. Por otro lado, el repliegue hacia identidades comunitarias más fuertes que una identidad nacional en crisis, lleva hacia un resurgir religioso y hacia el renacimiento de las identidades étnicas y regionales para quienes no las han perdido. Ahora bien, para la mayoría de la población, pareciera que la tendencia dominante fuese la de constituir una comunidad territorial defensiva como apoyo de estrategias de supervivencia individual. No se observa, en general, el surgimiento de un principio identitario unificador que llene la orfandad de una Nación abandonada por su Estado.

2.3. Crisis, Reconstrucción y Transformación del Estado en América Latina

La evolución del Estado parece ser la clave de la crisis y/o reconstrucción de la identidad en América Latina. ¿Que está sucediendo?

Aunque es arbitrario hablar en general del Estado en América Latina me atreveré

a formular una hipótesis. Fue, históricamente, un Estado débil que, desde los años treinta, construyó su permanencia en base a una alianza con los sectores medios urbanos y con los trabajadores organizados. Sobre esta alianza se construyó un Estado populista (priismo, varguismo, justicialismo) o democrático (Chile, Venezuela, Colombia), pero siempre clientelista. Siempre dependiente de su capacidad para captar la riqueza del país, pagar su cuota a los socios extranjeros y distribuir los recursos al sector urbano organizado, mediante la administración pública, mediante las empresas públicas y mediante un Estado de bienestar hecho a la medida de las clientelas políticas. Al margen quedaban los campesinos y los sectores populares no organizados, así como, en algunos Estados, los sectores capitalistas autónomos (grupo Monterrey en México). Solo las repúblicas centroamericanas (pero no Costa Rica) y Paraguay, corresponden al cliché del Estado instrumento directo y exclusivo de la oligarquía. La política cepalina fue el modelo económico adaptado a las condiciones políticas de ese Estado nacional-popular. Cada vez que se intentó romper ese equilibrio de alianzas entre sectores populares organizados, clases medias burocráticas y grupos económicos dominantes como capitalistas pero no como actores sociales, se produjo una crisis del Estado (Argentina en los cincuenta, Brasil en los sesenta, Chile en los setenta, México en los ochenta). Solo se consiguió una estabilidad relativa cuando de alguna manera, explícita o implícita, dichas alianzas se recompusieron. Pero en los noventa, para superar la crisis estructural de los ochenta, el Estado intentó asumir un nuevo papel: el de modernizador en el marco de la globalización. Es un papel contradictorio porque, a diferencia del Estado desarrollista, la modernización como adaptación a la economía global, consiste sobre todo en traspasar al mercado lo que era del Estado. Para llevar a cabo ese proyecto, indispensable para la modernización tecnológica y la participación del sector dinámico de la economía en el nuevo capitalismo global, los Estados utilizaron con frecuencia sus apoyos tradicionales para, de hecho, romper los privilegios de dichos sectores y dejarlos expuestos a la competitividad. Del Estado nacional-popular se pasó al Estado neoliberal. Esa fue la política de Pinochet, en su versión autoritaria; la política de Salinas y luego de Zedillo y Fox (pese a las diferencias de aparatos políticos), la política de Menem, la política de Sánchez Losada, la política de Fujimori. La política de Cardoso correspondió a ese esquema en sus objetivos, pero no en sus apoyos políticos. Para sentar las bases de una política liberal, Cardoso buscó apoyos de centro-derecha, enfrentándose de hecho a la coalición de centro-izquierda que representó los intereses del sector popular clientelista del Estado. Este proyecto de adaptación a la nueva economía

global tuvo una conducción política en distintas versiones. Algunos gobiernos, como el de Cardoso, lo hicieron con sensibilidad social y respeto democrático. Otros, como Fujimori, de forma autoritaria. Otros, como el de Menem, mediante el sostenimiento artificial de la economía a través de la venta del patrimonio nacional, junto con la compra de complicidades políticas mediante la corrupción generalizada. Otros, como en México, profundizando la exclusión social al dar prioridad absoluta a la integración en la economía norteamericana. Pero en todos los casos se desmontó buena parte del sistema de alianzas en torno al Estado del que dependían las clases medias urbanas tradicionales y los sectores obreros organizados. Aún así, los gobiernos modernizadores ganaron elecciones en aquellos países (Argentina, Brasil) en que para la mayoría de la población las condiciones de vida mejoraron (pese al aumento de la desigualdad) y la inserción en el sistema global ofreció una perspectiva. Pero eso solo perduró mientras duró esa mejora de condiciones sociales y se convirtió en debacle electoral y política, como en Argentina, en cuanto se reveló la fragilidad del proceso. Allá donde los sectores agrupados en torno al Estado fueron suficientemente fuertes para frenar la liberalización (Ecuador, Colombia y, sobre todo, Venezuela) se caotizó la economía entre medidas formalmente liberales para consumo externo y el mantenimiento de los intereses corporativos en torno a la economía pública. En México, el proceso fue más complicado en la medida en que las clases medias urbanas rompieron definitivamente con el PRI, mientras que los sectores populares organizados decidieron apostar a una nueva ronda de clientelismo, mientras pudiese durar. No duró mucho y el Estado PRI empezó su descomposición (aunque está lejos de haber terminado su recorrido histórico, en la medida en que el PRI mantiene vivas sus redes de clientela y articulación de intereses). Pero el resultado generalizado fue la quiebra del Estado corporativo y/o clientelista, la ruptura de las alianzas sociales, la fragmentación del sistema político y la recomposición de la dirección política en torno a liderazgos personalizados democráticos (es decir, refrendados por procesos electorales). En el caso más extremo, en Venezuela, la corrupción generalizada de la clase política venezolana y su intento de aferrarse al Estado clientelar llevó a la crisis general de ese Estado. El inicial plebiscito popular en favor de Chávez, expresó un nuevo tipo de populismo que, a diferencia de los demás gobiernos, planteó una alternativa nacionalista radical a la globalización, abriendo así un proceso cuyo desarrollo y desenlace todavía abiertos están llenos de significación y dramatismo. Allá donde la clase política oscila entre el salto adelante de la liberalización y el mantenimiento del Estado tradicional, como en

Colombia, el Estado entra en descomposición, momento que pudo ser aprovechado por fuerzas insurreccionales que habían mantenido una resistencia testimonial en nombre de los marginados de siempre. En el contexto de la economía criminal y del intervencionismo estadounidense, el proceso desembocó en guerra civil abierta. Por otro lado, la profundidad de la crisis crea condiciones para una reacción de la sociedad y un último reflejo del sistema político para restablecer su legitimidad in extremis. Tal ha sido el caso de Argentina, donde Kirchner pudo apoyarse en una sociedad al borde del colapso para enfrentarse a los fantasmas del pasado, a la podredumbre de las instituciones judiciales y militares y a las presiones del Fondo Monetario Internacional con una determinación impensable poco tiempo antes. El resultado ha sido la estabilización de la economía y la relegitimación de la política, en un claro ejemplo de la autonomía de los sujetos políticos con respecto a las determinaciones estructurales. Asimismo, la elección de Lula representó la demanda de la sociedad brasileña para no ser postergada por más tiempo en aras de la reforma económica. El programa de Lula se presentó, ante todo, como la defensa de la Nación. Y esa es precisamente la contradicción que domina su gestión: cómo mantenerse en la globalización (y por tanto siguiendo la política del FMI) al tiempo que se afirman los intereses nacionales.

En resumen, el Estado-Nación latinoamericano dejó de ser nacional en la década de los noventa, con la excepción de Chile, Costa Rica y Brasil. Pero aun en estos casos, sus condicionamientos globales contaron más que sus legitimidades nacionales. Como consecuencia, se rompió la alianza tradicional con los sectores medios urbanos y sectores populares organizados, que son aún la base del sistema político latinoamericano. Ello conduce a la recomposición del sistema político de representación y liderazgo, y a la creación de una política dependiente de personalidades y de una relación mediática con las masas populares. Un populismo mediático agente de la globalización en contraste a un estatismo corporativo defensor de la Nación son los dos proyectos en competencia y en busca de apoyos sociales. Entre ambos, la capacidad integradora del Estado se ha perdido. Y la ideología del mercado sustituye a la ideología de la Nación.

Pero la crisis del Estado es también consecuencia de la descomposición de la clase política en muchos países como resultado de dos procesos interrelacionados que desembocan en una práctica política autodestructiva: la política del escándalo. El primer proceso es la penetración del Estado y del sistema político por redes criminales organizadas. No es un fenómeno significativo en todos los Estados, por

ejemplo no lo es en Chile y no parece que en Brasil vaya mucho más lejos que la tradicional corrupción de las mafias policiales. Pero los medios de comunicación han revelado corrupción sistémica en Colombia, Bolivia, Paraguay, Venezuela, Perú, Ecuador, Argentina y en la mayor parte de América Central y el Caribe y, con particular intensidad, en México, en donde la crisis violenta que sufre no es separable de las luchas que libran los carteles mexicanos del narcotráfico por obtener influencia en los distintos niveles del Estado. La corrupción resultante de esta penetración criminal deslegitima al Estado y bloquea su capacidad de maniobra en un momento decisivo de su reorientación.

El segundo proceso al que hago referencia es la emergencia, en América Latina como en el resto del mundo, de una nueva forma de competencia política, la política informacional. Se trata de que los medios de comunicación se han constituido en el espacio preferente de la política. No es que los medios controlen la política, sino que los líderes y partidos políticos compiten entre ellos y se relacionan con los ciudadanos en y por los medios. La política mediática tiene sus reglas, a saber la personalización de los liderazgos y la credibilidad de personas y siglas como valor fundamental en la formación de la opinión de los ciudadanos. Si lo esencial para ganar el apoyo popular es establecer dicha credibilidad, el arma de lucha política esencial es destruir la credibilidad del adversario. Y para ello el medio más eficaz es la difusión en los medios de comunicación de informaciones negativas sobre personas y organizaciones políticas. La mayor parte de esas informaciones provienen del entorno de los propios partidos, así como de grupos de interés que tienen por objetivo el desgastar a una persona o partido. Son filtraciones a los medios más que periodismo de investigación lo que alimenta la política del escándalo. Los niveles de corrupción son suficientemente altos como para proporcionar abundante material. Pero si no hay bastante, se fabrica, se manipula, se desinforma. Y como todos (o casi todos) lo hacen, y como hay que tener munición en reserva para disuadir al adversario, el debate político aparece dominado cada vez más por las denuncias, contra-denuncias y desmentidos sobre la corrupción y abusos de poder de la clase política. Y como los medios de comunicación son cada vez más flexibles y omnipresentes en la vida de la gente, son esas imágenes, y no los debates sobre alternativas políticas, los que constituyen la relación entre el ciudadano y el Estado. Así, en países como Chile, aun sin penetración significativa de la economía criminal, la corrupción y el escándalo también han pasado al primer plano de la escena política. El resultado es el desprestigio de la clase política y de

la legitimidad del Estado.

Tras haber visto disiparse la relación entre Estado y Nación, los ciudadanos asisten a la disociación entre representatividad y legitimidad. La crisis del Estado se dobla de la crisis del sistema político. La deriva política conduce a la deriva de la identidad.

2.4. La crisis de la globalización en América Latina y los actores sociales para su tratamiento

La contradicción entre los requisitos de funcionamiento del nuevo sistema de producción y organización social estructurado globalmente y las condiciones concretas de América Latina al inicio del siglo XXI se traduce en una crisis multidimensional que tiene expresiones distintas según como se manifieste esa contradicción en cada país. La interacción en la globalización sin informacionalismo conduce a una estructura socio-económica excluyente, por lógica de redes, de gran parte de la población y territorio, mediante redes que integran y marginan a la vez. El antídoto es el salto directo al informacionalismo y la progresión de una globalización por etapas, mediante integración comercial regional y mediante la regulación de los flujos de capitales. Funcionar como California o Francia sin serlo, conduce a la economía ficción como la que caracterizó la Argentina de Menem y tiene límites concretos en cuanto desaparecen las reservas en que se basaba la homologación financiera. Por tanto, hay, por un lado, exclusión social, por otro lado, insostenibilidad económica. Para las reformas técnico-económicas hace falta un apoyo social que, tras una década de adaptación a la globalización y repetidas crisis, plantea la cuestión de la reconstrucción de la legitimidad política como el requisito previo de cualquier reforma técnica.

Pero la perspectiva de dicha reconstrucción se complica cada vez más. Cuanto más se agota la base de acumulación global en el país, más se concentran los recursos en el sector globalizado, en la elite política y en sus círculos de apoyo concretos, con lo cual se achica su base social. Aumenta posiblemente la corrupción de la clase política en la medida que en el “sálvese quien pueda”, las elites se salvan ellas mismas en primer lugar.

Ya disminuida la legitimidad política nacional, sustituida por la legitimidad del mercado, la incapacidad de redistribuir y hacer participar mediante el mercado, conduce a una crisis general de legitimidad. Esto limita la capacidad de reforma

del Estado y su apertura democrática, por el temor de perder el control del proceso de apertura.

La identidad nacional no desaparece, pero se disocia del Estado, por lo cual es apropiada por distintas expresiones reivindicativas, no necesariamente compatibles. En ese sentido se convierte más que en identidad en ideología, fraccionada entre actores no nacionales. Las identidades étnicas y territoriales cobran fuerza, fraccionando aún más la fuerza integradora de la identidad nacional.

En el límite, hay crisis económica, crisis social y crisis de legitimidad política, llevando incluso a crisis del Estado mismo. Según la dimensión dominante, el sistema se hace insostenible en una u otra dimensión, pero todos los factores están presentes en las crisis de todos los países. Así, pensando en la situación en 2002-2003, la crisis argentina surge como expresión de la insostenibilidad de una economía globalizada sin bases reales para sostener una convertibilidad paritaria con el dólar, agravada por la corrupción de una clase política privilegiada, desembocando a una crisis de confianza en las instituciones financieras (el corralito) y en la clase política (“¡que se vayan todos!”). Cuando la contradicción es entre un Estado débil y una economía criminal pujante, se llega a la quiebra del Estado y, al intentar recomponerse el Estado en términos militares con apoyo estadounidense, a la guerra civil, como en Colombia. Cuando se disocia por entero la base social del Estado entre las clases medias aspirantes a la globalización y los sectores populares en búsqueda de un Estado populista, se rompe la legitimidad política y la identidad nacional a partir de una oposición de clase, amenazando una guerra de clases y una ruptura del Estado en términos distintos de la imagen clásica del marxismo latinoamericano, pero semejante a los populismos revolucionarios: ese parece ser el caso, cada vez más grave, de Venezuela. Cuando la identidad nacional es traicionada por la globalización dolarizada, como en Ecuador, surgen con fuerza identidades alternativas, de base indígena, como formas de expresión de las luchas de los excluidos. No es tan distinto de las contradicciones expresadas por el movimiento zapatista, aún no resuelto en México, o de movimientos comunitarios en otros países.

En suma, sin informacionalismo, sin regulación gradual de la globalización, sin Estado reformado, sin legitimidad política, sin control de la economía criminal, sin principios de identidad compartida y sin formas de debate y participación política de los grandes sectores excluidos, la globalización truncada de América

Latina no parece sostenible, aunque esto sea materia de investigación más que de afirmación.

La reconstitución de una relación estable y dinámica entre economía, política y sociedad, pasa por lo reconstitución de actores sociales específicos capaces, en cada contexto, de llevar a cabo esa articulación. Los gobiernos nacionales, por sí mismos, no pueden ser los actores de dicha reconstrucción. Pero siguen siendo indispensables para articular política, sociedad y economía. El contexto internacional no es favorable a las reformas. Los EE.UU. no están dispuestos a reformar, sino que dan prioridad absoluta al imperativo de su seguridad, a partir de la paranoia defensiva-ofensiva suscitada por el 11 de septiembre. La Unión Europea no tiene aún política clara sobre el tema, aparte de buenas palabras. Por tanto, América Latina tiene que construir su espacio autónomo en una globalización regionalizada. Para esa construcción, la relación entre gobiernos y actores sociales es decisiva. ¿Cuáles son esos actores? Los tradicionales (sindicatos, campesinos, etc.) son frecuentemente representantes de intereses corporativos, poco capaces de definir en términos propios un proyecto de inserción en la globalización. Los movimientos identitarios son formas de repliegue comunitario, esenciales para la supervivencia, pero agravan la crisis de sostenibilidad del sistema en su conjunto.

En cambio, el llamado movimiento anti-globalización (o por la justicia global, en los términos de sus actores) es muy importante. Ha cambiado el debate sobre el sistema, ha abierto opciones posibles. Ya no es anti sino por otra globalización. Pero en sí no es un actor, ni tiene contenidos compartidos. Es un conjunto de actores y de intereses y valores amalgamados, y es global y local a la vez, esa es su fuerza. Es en realidad un gran movimiento democrático, cuya bandera es el “no a la globalización sin representación”, lanzado en Seattle. Propugna un mecanismo y un debate sobre los contenidos de la globalización, replantea el control social y político de la economía y la tecnología a partir de la sociedad y la política. Pero como no es un actor en sí, necesita la mediación política. Puede ser principio de relegitimación para aquellos Estados y gobiernos que lo asuman como tal, aun con la necesaria distancia. En cierto modo es el embrión de una sociedad civil global, junto con la densa trama de más de 30.000 ONGs operando internacionalmente. La movilización por una globalización alternativa agrupa a un sistema complejo de actores. No hay un actor central. Es un movimiento social red, intentando conectar a nodos del Estado-Red que emerge en la sociedad red y en un contexto de redes globales de riqueza, información y poder.

Así pues, parece que la configuración concreta de actores sociales, parte desde actores locales y nacionales, tanto reivindicativos como identitarios, específicos para cada país, que después van conectándose, superando sus estrechos límites, en ese movimiento por una globalización alternativa que generaliza sus proyectos y les proporciona alcance operativo en el nivel en donde se deciden hoy por hoy la suerte de las sociedades, el nivel global.

¿En que medida pueden los Estados responder positivamente a esta última posibilidad de hacer sostenible el sistema? En la medida en que maximicen su autonomía como actores políticos, por un lado con respecto a los intereses inmediatos que representan (incluido los suyos propios como individuos dispuestos a enriquecerse) y por otro lado con respecto a la red global de intereses y estrategias en la que están inmersos. Es decir, la autonomía política puede permitir crear un espacio nuevo de representación, en que los nuevos actores sociales puedan emerger y dar sustento social a la representación política colectiva en el contexto de relaciones globales. Los actores se articulan entre ellos globalmente y con respecto a los gobiernos o sistemas políticos local y nacionalmente. Solo en la medida en que esa doble relación consiga un espacio de decisión específica a cada sociedad, puede producirse una doble regulación de la globalización en base a los intereses y valores sociales exteriores a los mecanismos automáticos de dominación económica e ideológica inscritos en las redes globales dominantes. Solo entonces la globalización será sostenible. Porque será la globalización de las personas, no solo del capital. Porque comunicará identidades en lugar de disolverlas bajo la dominación de una cultura global. Ese es el debate planteado en América Latina en los prolegómenos del siglo XXI. Y en ese debate se sitúa Chile.

3. REFLEXIONES SOBRE LA RELACIÓN ENTRE ESTADO, IDENTIDAD, SOCIEDAD Y GLOBALIZACIÓN EN CHILE, 1990-2003

3.1. Matriz histórica de la relación Estado, Sociedad e Identidad

A lo largo de su historia la identidad colectiva fundamental de Chile ha sido la identidad nacional. Fue construida a partir del Estado: el Estado configuró la Nación como principio de cohesión interna, por encima de las clases, y como principio de defensa frente al exterior: los peligrosos vecinos, las potencias económicas expoliadoras, las empresas extranjeras. Naturalmente que el Estado también

representó los intereses de las clases dominantes en cada momento histórico. Pero el principio constitutivo del Estado fue el de representar y articular a la Nación chilena como comunidad frente al exterior. La construcción de un ejército profesional y de una administración pública eficiente y regulada fueron elementos esenciales del reforzamiento del Estado frente a grupos de intereses de clase.

La legitimidad del Estado así constituido descansó sobre un triple principio: fue un Estado democrático; fue un Estado de institucionalidad generalmente respetada a lo largo de su historia, en particular con unas FF.AA. constitucionales; fue un Estado democrático-populista que integró a las clases medias burocráticas y a los sectores populares organizados mediante una política clientelista, a partir de la captación por el Estado de las regalías de las empresas explotadoras de las riquezas naturales del país. Durante la administración demócrata-cristiana de los sesenta este modelo se profundiza y se hace populista-participativo mediante las reformas agraria y urbana y el desarrollo del movimiento campesino y movimiento poblacional junto al movimiento sindical.

3.2. Ruptura del modelo clásico Estado-Sociedad-Identidad

El golpe militar destruyó no solo la democracia sino el modelo de Estado y la relación Estado/Nación. El Estado se separa de la Nación y se hace Estado de clase y corporativo militar. La Nación se fracciona entre clases y entre vencedores y vencidos. El Estado se hace en realidad vasallo de EE.UU., inspirador del golpe y se alinea en función de la política de bloques en América Latina.

La reconstrucción de la legitimidad, más allá de sus bases de apoyo directas, se hace en dos niveles: a) Mantenimiento del orden y defensa de los valores tradicionales (cristianismo conservador, moralidad castrense, anticomunismo, etc.). Pero esto solo convence a los convencidos y a los asustados; b) Desarrollo económico con distribución de beneficios mediante el mercado, aceptando por tanto la exclusión de parte de la población. Pero se rompe, como ideología, aunque no totalmente en la práctica, con el clientelismo como forma de legitimación.

La ideología del mercado reemplaza a la de la Nación. La pertenencia a la Nación está fragmentada y la relación entre Nación y Estado es sustituida por la relación entre individuo y mercado, bajo la protección del Estado, en nombre de una Nación que se hace referencia puramente ideológica. Se diluyen también las identidades regionales y locales, se convierte lo local/regional en divisiones de

gestión administrativa numeradas como legiones romanas.

La crisis del Estado militar se produce por su incapacidad a institucionalizar su dominación bajo una legitimidad democrática liberal excluyente. Es decir, el mercado no basta para estabilizar la relación Estado-sociedad una vez pasada la situación de emergencia. Y la represión no sirve contra las clases medias urbanas y sus actores políticos cuando la amenaza de guerra de clase ha desaparecido.

3.3. La relación Estado-Nación en la transición democrática

Los gobiernos de la Concertación negocian con los poderes fácticos el mantener sus privilegios y derecho de veto y buscan una nueva legitimidad basada en la continuidad de la legitimidad del mercado como principio de proyecto personal en el marco de una legitimidad democrática del Estado. Pero añaden un correctivo fundamental: el Estado deja de ser instrumento de exclusión para ser instrumento de integración, mediante políticas sociales de redistribución y mediante la creación de un sistema de relaciones industriales y organización institucional de la relación sociedad-Estado. No se restablece la identidad nacional en la práctica como principio de legitimidad porque la Nación sigue dividida, con las clases dominantes y las Fuerzas Armadas construyendo su propio sistema de legitimidad y con escasas posibilidades de competir en el Estado democrático, precisamente por su negativa a aceptar reglas del juego comunes. En esas condiciones, la identidad se individualiza y fracciona según las oportunidades que el mercado y el sistema de redistribución ofrece a cada uno. La Nación sigue separada del Estado y éste trabaja ahora sobre una triple legitimidad y dentro de un límite. El límite, el sistema de libertad vigilada constitucional. La triple legitimidad: democracia en lo posible (democracia amnésica con respecto a las violaciones de los derechos humanos); reconocimiento de los actores sociales y políticas redistributivas; y, sobre todo, continuidad del crecimiento económico y mantenimiento del mercado como principio común aceptado por toda la sociedad: por eso la ideología del mercado es la ideología de base, porque es la única que incluye a casi todos, particularmente porque ahora extiende su valor práctico a las clases populares. Se esboza tímidamente una revalorización de las identidades locales. La sociedad civil construye incipientes movimientos sociales (ecologismo en particular) y, sobre todo, se rearticula un tejido asociativo autónomo.

En esas condiciones se plantea, a finales de los noventa, el debate sobre el

malestar chileno, a partir de la crítica de la ideología del mercado como único aglutinante y de la constatación de la pérdida de identidad nacional, solidaridad social y proyecto colectivo (Garretón, 2003). Pero es una crítica minoritaria en la medida en que el mercado funciona para una proporción importante de la sociedad, en la medida en que hay mejora de las condiciones de vida y en la medida en que hay una actitud precavida frente al peligro de involución democrática.

3.4. La recesión de 1999 y la crisis sociológica

La recesión de 1999, aunque leve, evidenció los límites del mercado como única fuente de apoyo. El importante informe de Desarrollo Humano de 1999 muestra la inseguridad subjetiva como problema fundamental. Si el mercado es lo único y no lo soluciona todo, se plantea un problema de inseguridad pero también de identidad. Para considerarse proyecto individual hay que poder mantenerse individualmente. Hay privatización del riesgo, a la Beck*, pero sin capacidades objetivas para asumir ese riesgo entre amplios sectores de la población. Como escribió Tironi (2003), “La contracción del crecimiento tuvo efectos que trascendieron lo estrictamente económico, especialmente para una amplia clase media que no contaría ya –como antaño– ni con la protección estatal ni con el apoyo de redes comunitarias extinguidas a consecuencia de la individuación y competencia que acarrió la violenta modernización de los 90 [...] Esto provocó (en 1999) una suerte de síndrome de privación, con sus consecuencias: frustración, pesimismo, angustia, depresión” (2003: p. 32).

3.5. La reconstrucción de los vínculos Sociedad-Estado-Identidad:

Los contenidos posibles de una identidad-proyecto en el Chile del siglo XXI.

Como suele ocurrir, la crisis de 1999 indujo una recomposición de iniciativas políticas y sociales, que revelaron que había más reservas de lo que se creía en la sociedad chilena. Varios procesos concurren:

a) Las encuestas de 2000-2001 (por ejemplo, del Centro de Estudios Públicos) revelan que la ideología de mercado no es fundamentalmente consumista, excepto en un sector reducido de la clase media-alta. Es más bien, en la fracción mayoritaria de los encuestados, una ideología individualista de tipo ética protestante: esfuerzo

* NOTA DEL EDITOR.

En Beck, los individuos, en la “segunda modernidad”, deben asumir la construcción de sus biografías rotas en medio de la atomización procedente de la pérdida de la mística y agotamiento de las fuentes de identidad y certidumbre que ofrecía la sociedad industrial y el quiebre de las bases institucionales que apoyaban los procesos de individuación: el Estado de Bienestar y la protección de los derechos humanos. Este fenómeno de “destradicionalización”, asociado a la globalización y desnacionalización, compelen a los individuos a crear “culturas híbridas” y transitar de la monogamia a la poligamia de lugares, mediante la realización de extraordinarios esfuerzos y a exponerse a “riesgos incalculables”. Además, tienden a percibir el fracaso –desempleo y patologías de la personalidad–, como atribuibles a ellos mismos y no a experiencias colectivas. (Ver Ulrich Beck, “Vivir nuestra propia vida en un mundo desbocado: individuación, globalización y política” en Anthony Giddens y Will Hutton, eds. En el Límite. La vida en el Capitalismo Global, Kriterion, Tusquets Editores, Barcelona, 2001, págs. 233-254. (Citas corresponden a las páginas 237-238).

propio, trabajo y, sobre todo, educación, como vía de mejora individual y colectiva. Es decir, no es una sociedad de consumo sino de desarrollo individualista. Por tanto, se responde a la crisis redoblando el esfuerzo individual y preocupándose de la educación de los hijos.

b) El capital social es relativamente importante, tanto en términos de asociaciones formales como de redes informales, como revela el Informe de Desarrollo Humano del 2000. La reconstitución de la sociedad civil se hace también en la pluralidad de su existencia, incluyendo la re-emergencia, potencialmente conflictiva, de la identidad mapuche. Sin embargo, el capital social está desigualmente distribuido: es mayor en los grupos socio-económico de mayor nivel, por lo que existe el peligro de que los pobres y las clases populares no dispongan de recursos a través del mercado ni a través del capital social.

c) Eso requiere por tanto un esfuerzo redistribuidor del Estado, que de hecho intervino, tanto en salud, vivienda y educación como, sobre todo, en el seguro de cesantía y en la reforma de las pensiones (el gran problema pendiente en Chile) para prevenir crisis de mayor envergadura. Se apunta así hacia un Estado de bienestar que vaya más allá del Estado liberal redistribuidor.

d) Reconstrucción institucional: tras la caída relativa del voto por la Concertación en las elecciones de 1997, se aprecia una posición competitiva de la derecha, las clases dominantes piensan que de nuevo tienen posibilidades de ganar mediante el juego democrático, Lavín se distancia de Pinochet y por tanto, se restablece el juego democrático en la realidad. También, la presión interna y externa conducen a la deslegitimación del dictador, a su retirada de demencia legal y, en íntima relación con ese proceso, a la re-democratización y normalización de la institucionalidad de las FF.AA.

e) En ese contexto, se produce la progresiva recuperación de la memoria colectiva, la afirmación de los derechos humanos, la reparación de las injusticias y la reivindicación de la historia democrática de Chile. En septiembre del 2003 la recuperación de símbolos, como Víctor Jara y el homenaje institucional al Presidente Allende, crean las bases para que la Nación se reúna en torno a una memoria común fraccionada pero no negada, conflictiva pero asumida.

En ese proceso, pues, el Estado restablece la legitimidad democrática y la legitimidad de protector/redistribuidor junto a la legitimidad del mercado como principio de cohesión de la sociedad, frente al poder disgregador, pero dinámico,

de la identidad individualista y de la ideología del mercado. Pero no es tan fácil restablecer la identidad nacional como identidad colectiva una vez que los principios de individuación han operado a gran escala.

Y, sin embargo, es esencial la existencia de una identidad colectiva como principio de cohesión en el momento en que Chile se enfrenta a una etapa decisiva de acción en la globalización: nueva competitividad, transición informacional y articulación en Estado-Red en el marco de nuevos acuerdos transnacionales en los que el Estado, para no perder su anclaje en Chile, necesita saber que representa a más que una suma de individuos, distintos de Argentina o EE.UU.

Tal vez lo que se plantea es la reconstrucción de un nuevo tipo de identidad nacional. En mis análisis comparados sobre la identidad he distinguido, a partir de la observación, entre identidades legitimadoras, identidades de resistencia e identidades-proyecto. La identidad legitimadora que proporciona la ideología del mercado a través de la práctica del consumo parece haberse agotado como principio de sentido para el conjunto de la población. La identidad de resistencia se manifiesta en la identidad mapuche, pero no abarca a una sociedad como la chilena que no se percibe como amenazada. Por tanto, la identidad colectiva posible en torno a la cual Chile podría re-agregarse y movilizarse como comunidad es una identidad-proyecto, una identidad a partir de una práctica común hacia un objetivo compartido. ¿Puede Chile albergar una identidad-proyecto colectiva, más allá de la felicidad individual de cada familia a través del mercado? Todo depende del proyecto y de la forma de construcción del proyecto. Es un proceso, no una ideología. El Informe de Desarrollo Humano del 2000 señala la importancia de los “sueños” para los chilenos. Pero no son sueños imaginarios, sino contruidos y proyectados mediante conversaciones y mediante prácticas compartidas. ¿Qué prácticas compartidas podrían engendrar sueños con capacidad de proyecto colectivo?

Observando la experiencia internacional de experiencias de desarrollo contruidas en torno a proyectos colectivos, casos como los de Irlanda o Finlandia en los 90 vienen a la mente. En ambos casos hay una fuerte afirmación de identidad nacional y cultural y una voluntad de prosperar en la globalización manteniendo la solidaridad interna en la comunidad nacional. En el caso de Finlandia se afirma también el proyecto-mito de constituirse en la más avanzada sociedad de la información en el mundo, superando incluso a la Suecia que fue su dominador colonial

durante siglos. Y de hecho, en base a los indicadores habituales y al ranking de Naciones Unidas, Finlandia es la sociedad de la información más avanzada, por encima de Estados Unidos (Castells y Himanen, 2002). Pero lo que es relevante para el argumento aquí presentado es que ese desarrollo tecnológico y económico se planteó como afirmación de una identidad cultural y nacional en un mundo globalizado. En cierto modo, la crisis estructural que sufrió Finlandia en 1991-93 fue el acicate para encontrar un proyecto nacional movilizador, en el que la identidad colectiva se transformara en proyecto. No se trata aquí de proponer a Finlandia o a Irlanda como modelo. Cada país tiene su trayectoria histórica específica. Pero la referencia finlandesa me sirve como ilustración del concepto de movilización identitaria en torno a un proyecto colectivo de futuro, enraizado en la historia, pero no dependiente de sus esencias.

¿Chile sociedad de la información? De hecho, sería un componente fundamental de la nueva fase del modelo democrático de desarrollo, en la medida en que el desarrollo chileno tiene que redefinir sus estrategias para ser competitivo en el nuevo contexto de la economía informacional global. Pero el desarrollo informacional es social por definición porque es desarrollo de las mentes, de las relaciones sociales y de las instituciones de aprendizaje, creación e innovación. De ahí el círculo virtuoso entre desarrollo y bienestar, mediante la relación entre innovación, tecnología y economía. Pero si la gente no está interesada, si no es su proyecto, la sociedad de la información aparece simplemente como propaganda tecnocrática de modernidad. En cambio, el proyecto informacional consiste en adaptar la tecnología para los usos, intereses y valores de la sociedad y de cada uno de sus individuos.

Así, tal vez la movilización colectiva de Chile en función de una identidad-proyecto podría construirse en torno al desarrollo de una sociedad de la información con características propias. Pero no como proyecto tecnológico sino como articulación entre modernidad tecnológica, prosperidad material, creatividad cultural, programa educativo y superación del aislamiento social y cultural, un tanto provinciano. Por eso la apelación mítica del nuevo modelo chileno podría construirse en torno a la referencia de Valparaíso. Valparaíso como hipertexto de relación local/global. Valparaíso como metáfora de cultura abierta al océano del mundo, pero a partir de una irreducible identidad propia que entronca con la experiencia histórica y la memoria colectiva.

Nota bibliográfica

El texto aquí presentado no pretende documentar exhaustivamente los procesos y hechos referenciados, teniendo en cuenta la amplitud de los mismos. Por ello, me limito a señalar y comentar algunas fuentes bibliográficas que han servido de sustento directo al análisis elaborado.

- Con respecto a la problemática general de la relación entre globalización, identidad y Estado remito al lector a la segunda edición de mi libro *El Poder de la Identidad*, Alianza Editorial, Madrid, 2003, que contiene datos y referencias sobre los temas objeto del análisis.

- Con respecto a la evolución reciente de América Latina en sus distintas dimensiones, remito a la obra colectiva coordinada por Fernando Calderón *¿Es sostenible la globalización en América Latina?*, Fondo de Cultura Económica, 2 vols., Santiago de Chile, 2003. Asimismo, Ana Celia Castro (coord.) *Desenvolvimento em Debate: Novos Rumos do Desenvolvimento no Mundo*, BNDES, Río de Janeiro, 2002.

- Sobre el modelo informacional, Manuel Castells y Pekka Himanen *The Information Society and the Welfare State: The Finnish Model*, Oxford University Press, Oxford, 2002, y Jorge Katz y Martin Hilbert *Los caminos hacia una sociedad de la información en América Latina y el Caribe*, CEPAL, Santiago de Chile, 2003.

- Sobre la historia de la relación entre Estado, Identidad y Sociedad en Chile, he utilizado mis notas y referencias de un viejo libro mío *La Lucha de Clases en Chile, Siglo XXI*, Buenos Aires, 1974, libro con cuya matriz teórica y ideología política estoy ahora en profundo desacuerdo, pero que contiene un material documental y bibliográfico útil para el entendimiento del tema aquí tratado.

- Sobre la dinámica social y política del Chile de los 90, he utilizado abundantemente los Informes de Desarrollo Humano en Chile, realizados por el PNUD en 1999, 2000 y 2002, así como los análisis de varios de los excelentes científicos sociales que hay en Chile, en particular nuestro añorado Norbert Lechner *Las sombras del mañana: la dimensión subjetiva de la política*, LOM Ediciones, Santiago, 2002; Manuel Antonio Garretón *Incomplete Democracy. Political Democratization in Chile and Latin America*, University of North Carolina Press, Chapel Hill, 2003; Ernesto Ottone y Crisóstomo Pizarro *Osadía de la prudencia. Un nuevo sentido*

del progreso, Fondo de Cultura Económica, Santiago, 2003; Eugenio Tironi El cambio está aquí, La Tercera/Mondadori, Santiago de Chile, 2002.

CUADERNOS DEL FORO VALPARAÍSO

CUADERNO 1

Held, David. “Social Democracia Global”, marzo 2004.

CUADERNO 2

Giddens, Anthony. “La agenda progresista”, junio 2004.

EN PREPARACIÓN:

Esping-Andersen, Gøsta. “Contra la herencia social”.

Ottone, Ernesto & Pizarro, Crisóstomo. Extracto de Osadía de la prudencia (FCE, 2003),
junto a los comentarios de Agustín Squella y Edgardo Boeninger.

Fuentes, Carlos. Conferencia “Una agenda latinoamericana”, Valparaíso (26 marzo 2004).